

**Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial:** San Salvador, a las quince horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veinte.

En fecha 10/06/2020, el licenciado XXXXXXXX presentó a esta Unidad por medio del Portal de Transparencia de Órgano Judicial, la solicitud de información número 397/2020, por medio de la cual requirió vía electrónica:

“Datos estadísticos correspondientes a la aplicación del Decreto Legislativo N° 717/2017, relativo a las disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembros de maras, pandillas o agrupaciones ilícitas, por parte de los Juzgados de Paz de todos los municipios de los departamentos de San Miguel y San Vicente, es decir, necesito conocer en cuántos casos se ha requerido la aplicación de dicho decreto, ya sea imponiendo o ratificando medidas de las referidas sedes judiciales. | La información está a disposición en los Juzgados de Paz de los municipios de los departamentos de San Miguel y San Vicente, porque ellos son quienes tienen la documentación correspondiente y conocen si se ha aplicado o no el decreto. | Los datos estadísticos que necesito sobre ese tipo de expedientes, por cada sede judicial que ha aplicado el decreto, son: 1. Número de casos en los que se ha requerido o solicitado la aplicación de decreto, ya sea para imponer o ratificar medidas, separando los casos de solicitud de imposición de los de ratificación | 2. Número de casos en los que se ha accedido a la imposición o ratificación de medidas; y, casos en los cuales se ha denegado. | 3. Número de personas a quienes se les ha impuesto o ratificadola imposición de medidas. | 4. Tipos de medidas que se han impuesto o ratificado, señalando el número de veces que se ha repetido cada medida, en caso de haber varios expedientes. | 5. Por cada caso en que se ha aplicado el decreto, señalar las diligencias principales que fueron presentadas; y, si en éstas se encontraba declaración jurada de persona respecto a quien se requería la imposición o ratificación de medidas. | 6. En caso de haberse inaplicado el decreto antes señalado, señalar las razones principales que conllevaron a tomar esa decisión. La información que necesito es desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2020”.

***Considerando:***

**I. I.** La solicitud fue presentada a las dieciocho horas con treinta y tres minutos del 10/06/2020, siendo hora inhábil, se tiene como presentada el 11/06/2020, de conformidad con el art. 81 de Ley de Procedimientos Administrativos.

**2. A.** En relación con la información requerida, debe tenerse en consideración que el objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública, según lo establecido en su art. 1 es el de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y, según el art. 4, letra a) de ese mismo cuerpo normativo, la información pública se rige por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

El art. 10 de la LAIP, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho la que se debe dar a conocer al público sin necesidad de una solicitud de acceso, y el art. 13 de la misma ley, establece qué tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del Órgano Judicial.

**B.** Pese a todo ello, no toda petición de información que se solicite puede ser tramitada, por cuanto jurisprudencialmente se han construido límites para la obtención de la información por esta vía administrativa, en los términos prescritos en la LAIP, haciéndose una distinción entre información de índole administrativa y la de carácter jurisdiccional.

Al respecto, en las resoluciones del 6/7/2015 y 29/9/2015, pronunciadas en los Amparos 482-2011 y 533-2013 respectivamente y en la resolución del 20/8/2014, Inc. 7-2006, se indicó que a partir de una interpretación sistemática de los arts. 110 literal “e” de la LAIP y 9 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que hay una intención manifiesta de que la información relativa a los procesos jurisdiccionales se obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos, y no con las normas estatuidas por la LAIP. En este sentido, debe entenderse que el acceso a la información pública que facilita la normativa en mención, únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional.

En este contexto, en la jurisprudencia aludida se estableció que: “... **la información jurisdiccional es todo dato que constata la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado**”

**ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros.** Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso. Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente...” (sic). (Resaltados agregados)

Sobre el efecto vinculante de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, en la improcedencia del 25/9/2014, emitida en el proceso de hábeas corpus 445-2014, la cual puede ser consultada directamente en el Portal del Centro de Documentación Judicial, por ser información de carácter oficiosa, se ha sostenido “...*la obligación de los aplicadores jurisdiccionales o administrativos de cumplir con lo ordenado en las reglas adscritas a las disposiciones constitucionales, así como con lo dispuesto en la interpretación de los contenidos de los derechos fundamentales efectuada a través de los procesos constitucionales, entre ellos, los de amparo y hábeas corpus...*” (itálicas agregadas).

En dicha decisión, la Sala de lo Constitucional indicó que sus resoluciones y fallos:“... no pueden entenderse como documentos conformados por segmentos aislados e incoherentes, carentes de efectos obligatorios, sino como un todo armónico y unitario en el que se reflejan y concretiza la actuación jurisdiccional y la fundamentación y decisión del tribunal, todo lo cual está dotado de plena obligatoriedad para las partes procesales; y en el caso de las resoluciones y fallos de la Sala de lo Constitucional, ***estos tienen efectos vinculantes jurídicamente para las autoridades***”(itálicas y resaltados agregados).

En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha delimitado “los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. (...) [l]o que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero,

mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales...”. (Inc. 7-2006 ya citada).

C. En esa línea argumentativa el Instituto de Acceso a la Información Pública, por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), del 17/5/2016, sostuvo que “... el art. 110 letra “f” de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, debe interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

Asimismo, el mencionado Instituto por resolución con referencia NUE 144-A-2017, del 12/6/2017, determinó que si bien la LAIP le otorga facultades para dirimir controversias “entre los entes obligados y la población peticionaria en general, dichas controversias deben versar sobre temas de **acceso a la información pública** para que se active la competencia objetiva y así conocer de los casos que se presentan en esta instancia”; por tanto, declaró improponible el recurso de apelación interpuesto por un ciudadano contra resolución emitida por esta Unidad de Acceso, respecto a información relacionada con un expediente judicial.

3. En virtud de las consideraciones antes expuestas, esta Unidad advierte lo siguiente:

A. En la solicitud de información el peticionario requiere: “... necesito sobre ese tipo de expedientes, por cada sede judicial que ha aplicado el decreto, son: 1. Número de casos en los que se ha requerido o solicitado la aplicación de decreto, ya sea para imponer o ratificar medidas, separando los casos de solicitud de imposición de los de ratificación | 2. Número de casos en los que se ha accedido a la imposición o ratificación de medidas; y, casos en los cuales se ha denegado. | 3. Número de personas a quienes se les ha impuesto o ratificado la imposición de medidas. | 4. Tipos de medidas que se han impuesto o ratificado, señalando el número de veces que se ha repetido cada medida, en caso de haber varios expedientes. | 5. Por cada caso en que se ha aplicado el decreto, señalar las diligencias principales que fueron presentadas; y, si en éstas se encontraba declaración jurada de persona respecto a quien se requería la imposición o ratificación de medidas. | 6. En caso de haberse inaplicado el decreto antes señalado, señalar las razones principales que conllevaron a tomar esa decisión. La información que necesito es desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de mayo de 2020”.

B. Al examinar el contenido de la solicitud de información, claramente se observa que todos los requerimientos realizados tienen como *componente común* conocer sobre la imposición de medidas judiciales a que se refiere el Decreto Legislativo núm. 717/2017.

Al respecto y con base en el art. 12 del referido decreto, hay que señalar que dichas medidas se adoptan en un proceso judicial mediante una resolución con una determinada finalidad; en ese sentido, dada su particularidad, instrumentalidad y temporalidad, la única manera de conocer si en un proceso se ha adoptado una medida cautelar es mediante la revisión del mismo. Por consiguiente, las peticiones formuladas en la solicitud de información, conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública, son de carácter jurisdiccional y únicamente pueden obtenerse en los tribunales respectivos.

En consecuencia, la solicitud presentada por el peticionario el 11/06/2020 no es competencia de esta Unidad, pues escapa del ámbito de aplicación de la LAIP, ya que se trata de información propiamente jurisdiccional, la cual debe ser requerida ante las instancias judiciales correspondientes de acuerdo con la normativa procesal correspondiente.

Por tanto, en consideración de las razones expuestas y con base en los artículos 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se resuelve:

1. *Declárese incompetente* esta Unidad de Acceso a la Información Pública, para tramitar la solicitud presentada por el licenciado XXXXXXXX, por ser la información requerida de índole jurisdiccional.

2. *Exhórtase* al peticionario que tramite su solicitud directamente ante las instancias jurisdiccionales correspondientes.

3. Notifíquese.

  


Lic. Giovanni Alberto Rosales Rosagni  
Oficial de Información Interino del Órgano Judicial

**NOTA:** La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.